

Crónica del mes

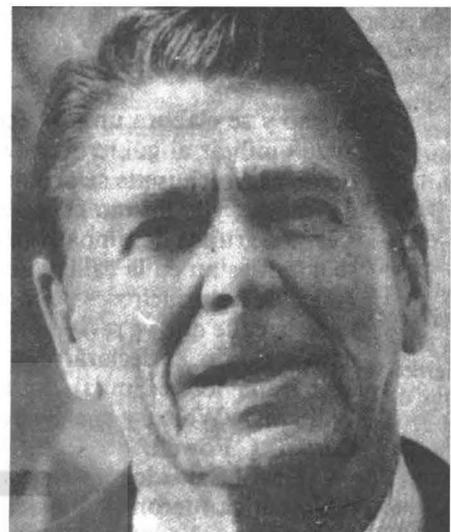
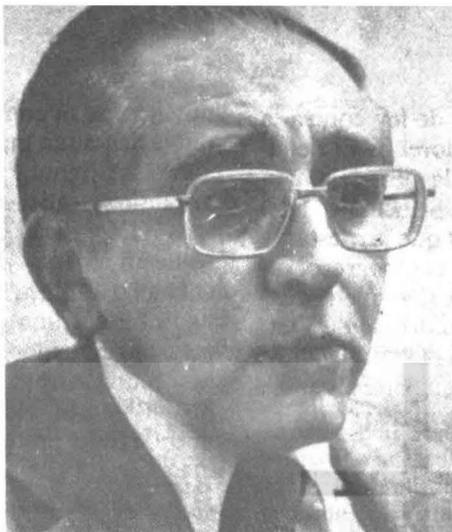
Febrero 1981

Si en el mes de enero lo más sobresaliente del acontecer salvadoreño fue la guerra militar, en la que el FMLN tuvo la iniciativa con su "ofensiva general", el mes de febrero se va a caracterizar básicamente por la guerra diplomática en la que la iniciativa es llevada por el gobierno de los Estados Unidos.

La ayuda militar y técnica de Estados Unidos al gobierno de El Salvador, reiniciada en el mes de enero, se mantiene e incrementa en febrero, a la vez que se suspende la ayuda económica a Nicaragua y se habla de un posible bloqueo a Cuba. En el Caribe se realizan maniobras en las que intervienen por lo menos 41 barcos de guerra norteamericanos, y en la zona del Canal 5,000 militares de todas las fuerzas participan en la operación "Black Hawk IV", a pesar de la protesta panameña incluida la del partido en el gobierno. Se preparan tres planes alternativos de intervención militar norteamericana en El Salvador, según las distintas circunstancias: el Plan Alpha, el Plan Beta y la Operación Charlie. A comienzos de febrero, en sólo cuatro días, 17 aviones C-130 descargan armas, municiones y pertrechos, y al menos un vuelo diario de semejantes transportes se realiza en los días siguientes. En fin, sigue llegando al país un número de asesores militares norteamericanos difícil de precisar, pues mientras la oposición da un número muy elevado, los gobiernos de El Salvador y de USA lo dan como muy reducido.

Acompañando a esta ayuda e intervención militar de los Estados Unidos en El Salvador, el gobierno USA emprende una ofensiva diplomática por toda Europa y América, enviando delegados del más alto nivel para tratar de forzar el apoyo de sus aliados, amigos y simpatizantes a su política hacia nuestro país. El objetivo de esta campaña es justificar a la Junta y gobierno salvadoreños, a las acciones y posturas gubernamentales norteamericanas en el conflicto, y a descalificar a la oposición salvadoreña como instrumento de la conspiración comunista internacional. La campaña plantea el conflicto en los términos de enfrentamiento este-oeste, capitalismo-comunismo y de equilibrio geopolítico, por lo que personas del más alto nivel de la política USA expresan que no se van a permitir más gobiernos comunistas en América, o que Centroamérica y el Caribe son el traspatio y zona estratégica de seguridad norteamericana. El gobierno de los Estados Unidos elabora el denominado "Libro Blanco" sobre la intervención comunista en El Salvador, en el que junta supuestas "pruebas" de compromisos para enviar armas a los insurgentes salvadoreños de parte de países socialistas, y otro tipo de apoyos y alianzas. Al mismo tiempo, sin embargo, no se preocupa por disimular su apoyo y presencia militares en El Salvador.

Esta política de los Estados Unidos para con El Salvador hace que se piense que este país se puede convertir en el "nuevo Vietnam", o que se



pueda producir la "vietnamización del conflicto". Así lo piensan numerosos políticos e intelectuales y parte de la opinión pública al interior mismo de los Estados Unidos —conviene leer el pronunciamiento de un grupo de norteamericanos residentes en México,— y en muchos países de América y Europa. Y aunque Reagan y su equipo se esfuerzan en afirmar que no se verán atrapados en El Salvador como lo fueron en Vietnam, los analistas políticos comparan el comienzo de la participación y ayuda militares en ambos casos así como las declaraciones oficiales del gobierno USA en aquel inicio, y encuentran un estrecho paralelismo con la implicación norteamericana en Vietnam y El Salvador.

La ofensiva diplomática de los Estados Unidos para lograr el apoyo de sus aliados en ninguna manera se puede afirmar que haya sido un éxito; más bien, la evaluación global la presenta como un fracaso. El Salvador ha estado en el foco de la atención mundial durante largo tiempo y ya no se desconoce su realidad. Querer presentar las causas de su problemática y de su conflicto interno como consecuencia de la conspiración comunista internacional resulta grotesco, ya que se sabe perfectamente de las causas internas que la han originado y que la Junta se mantiene sólo por el apoyo incondicional y obstinado de los Estados Unidos, sin el cual hace tiempo que se habría desmoronado y, tal vez, solucionado el conflicto. Por otro lado, hay una profunda suspicacia en muchos países respecto a la nueva línea política propuesta por la administración Reagan, que intenta una línea dura prepotente, militarista, de reinstauración de la guerra fría, y ha despertado sobre todo en Europa una dura reacción ante el proyecto de la instalación allí de las bombas de neutrones.

Europa unánimemente ha rechazado la ofensiva diplomática. Aun los gobiernos más afines al de USA se han limitado a recibir cortésmente a las delegaciones, y a tomar nota o a ofrecer examinar las pruebas. Por el contrario, todos han insistido en que hay que buscar una solución política, no militar; y muchos han denunciado, a su vez, la brutalidad del gobierno salvadoreño y de sus instituciones armadas, así como han condenado la ayuda militar de los Estados Unidos. Insisten en que hay que respetar la autodeterminación del pueblo salvadoreño. Por su parte, la Unión Soviética ha salido a defenderse de las acusaciones lanzadas contra ella, negando su participación en el conflicto y el que haya enviado armas o asesores, a la vez que denunciando la intervención norteamericana, cuyos asesores y armas sí se encuentran en El Salvador.

Tampoco en América Latina obtuvo éxito la ofensiva diplomática. México y Brasil fueron los más explícitos en oponerse a la línea política propuesta. Hasta la misma Venezuela mostró un cambio de rumbo y se adhirió a la postura mexicana. Panamá protestó la ayuda norteamericana al gobierno de El Salvador utilizando las bases de la zona del Canal. En general se externó la oposición a una intervención norteamericana. Si Guatemala y Honduras, al tiempo que negaban su participación militar en el conflicto, mostraban tímido apoyo a la política de USA, Costa Rica y Nicaragua se declaraban en contra de la intervención norteamericana, y el gobierno de la última desmentía su participación y ayuda a la vez que denunciaba la de los Estados Unidos.

En los mismos Estados Unidos la política de Reagan para El Salvador despertaba encontradas posturas. En el seno del congreso se gesta una fuerte crítica contra el enfoque militarista del go-

bierno y se elabora un proyecto de ley contra la ayuda militar al gobierno salvadoreño. El Senado de Massachusetts se pronuncia contra la ayuda militar; y lo mismo hacen las principales iglesias, los grupos de simpatizantes que protestan y se manifiestan en la calle y ante el Congreso, algunos de los principales periódicos, y mucha gente de la calle que ve revivir el "síndrome de Vietnam". En fin, se declaran contra la ayuda militar americana los exEmbajadores en El Salvador, Williams y White, y el exSecretario de prensa de Carter, J. Powell.

En El Salvador las reacciones a la ofensiva diplomática fueron muy diversas, según las posturas frente al conflicto. Rodríguez Ruiz, miembro del Comité político-diplomático del FDR-FMLN, denunció la intervención americana y las maniobras "Halcón Negro IV" y "Readex 1-81", así como la política USA. El FDR denomina la política norteamericana como de "estaca y zanahoria", denuncia la ayuda militar y la presencia de 50 barcos de guerra en el Pacífico centroamericano. El FMLN concretiza la denuncia de la intervención militar al afirmar que se han efectuado por lo menos 100 desembarcos de armas en el aeropuerto de Ilopango procedentes de la base aérea de Jacksonville, Arkansas, y que están en El Salvador asesores y comandos israelíes y norteamericanos.

Por su parte, tanto la Junta como el Alto Mando expresaron sus agradecimientos por la ayuda militar recibida; aunque Duarte, días después y en vista de la postura internacional, insiste en que la ayuda debe materializarse más en lo económico —dice se necesitan 300 millones de dólares—, y agradece a Reagan el que haya detenido la ayuda a los izquierdistas; aunque habla del peligro de la vietnamización— y algo parecido expresan el vicescanciller Gómez Vides y el ministro y secretario general del partido, Samayoa—, desmiente las afirmaciones del FDR-FMLN al afirmar que únicamente hay en el país 18 asesores militares norteamericanos —13 de ellos como instructores para los helicópteros— pero que ninguno de ellos participa en los combates; en fin, amenaza con la posibilidad de recurrir a los tratados de Río de Janeiro (TIAR). Por su parte, los más altos exponentes militares —Gutiérrez, García y Vides Casanova— al mismo tiempo que expresan su bienvenida y su agradecimiento por la ayuda militar, declaran que la Fuerza Armada tiene capacidad suficiente para controlar a la guerrilla, lo que no parece estar

muy acorde ni con la afirmación de Gutiérrez de que se necesitan más soldados, ni con las declaraciones del Pentágono que comparan a la Fuerza Armada salvadoreña con una guardia civil del siglo XIX y dicen que no sería capaz de vencer a la guerrilla ni aun con una superioridad numérica de cuatro a uno. Al mismo tiempo la Fuerza Armada monta una gran campaña para probar la intervención extranjera, y presenta a los medios de comunicación a un "supuesto mercenario sandinista" y a un piloto costarricense que fue detenido cuando pretendía evacuar a los pilotos de una avioneta que habría traído armas; sin embargo, la confusión y pobreza de los testimonios, así como el ardid mismo ya repetido, las circunstancias en que son presentados, más bien suscitan escepticismo.

Monseñor Rivera Damas, en sus homilias dominicales, insiste una y otra vez en pedir que no haya intervención extranjera de ningún tipo en el conflicto salvadoreño y se opone decididamente a que se envíen "fuerzas capitalistas". Al mismo tiempo solicita al Encargado de Negocios norteamericano, Sr. Chapin, que se esfuerce por entender el problema salvadoreño y que aliente una salida no violenta.

Toda esta complejidad conduce a que se empiece a buscar una salida política. Frente a la ofensiva diplomática norteamericana y a sus reacciones internacionales y ante el empate militar de ambos bandos contendientes, la Internacional Socialista, México, Suecia y Costa Rica, comienzan a proponer salidas negociadas y a ofrecerse para propiciarlas. Mons. Rivera también apoya esa iniciativa. Incluso funcionarios salvadoreños importantes, como el Director General de Relaciones Exteriores y el Embajador salvadoreño en Italia están por la salida política y afirman que su gobierno está anuente a ello. Sin embargo, el FDR, por medio de su Presidente, Dr. Ungo, expresa desconfianza ante las ofertas de diálogo del gobierno y concretamente ante la persona misma de Duarte.

Si bien es cierto que lo más trascendental del proceso salvadoreño, durante el mes de febrero, está centrado en el acontecer internacional, también en el interior del mismo país discurre el mes con aspectos importantes.

Se puede afirmar que la base social y política que sustenta el régimen se debilita constantemente. Algunas medidas que se adoptan en el mes suscitan el escepticismo, las protestas, o la oposición. Se renueva el Estado de Sitio y la Ley Mar-



cial o Toque de Queda. Se aprueba una Ley que exige la identificación personal de los menores de 18 años. Se mantiene la censura más estricta y la Cadena Nacional de Radio y TV., al tiempo que se continúa con la prohibición de noticieros, servicios sociales, avisos de carros perdidos y las dedicatorias de canciones. La crítica más acerba contra el gobierno proviene del Comité Político del PCN, que inexplicablemente es publicada en los diarios. Los empresarios muestran su preocupación por la anunciada reforma al Código de Trabajo en estos tiempos difíciles que vive el país. El Presidente de la Cámara de Comercio e Industria también hace una crítica al gobierno. En fin, AEAS protesta por el incumplimiento del subsidio prometido, y anuncia un paro nacional de los buses.

El conflicto interno se mantiene a un nivel muy elevado. A pesar del intenso patrullaje militar y de las repetidas declaraciones de la Fuerza Armada sobre la debilidad y el fracaso de la izquierda, casi todos los días se libran fuertes combates por amplias zonas del territorio nacional, especialmente en los departamentos de San Salvador, Chalatenango, San Vicente, La Unión, San Miguel, Santa Ana, Cuscatlán y Morazán. Suchitoto se mantiene aislado por más de dos semanas. Se cortan muchas carreteras. Los sabotajes a las torres de energía eléctrica dejan sin corriente a la capital y a varias localidades durante horas y al oriente del país durante días enteros. Atacan una planta de la ESSO, al Ministerio de Educación y al Centro Judicial Isidro Menéndez. El FMLN reporta 584 acciones diversas en todo el país, de las que 166 son en el departamento de

San Salvador, 77 en el de Cuscatlán y 76 en el de San Vicente.

En el mes hubo 1,402 muertos de la población civil, de los que 191 cayeron durante el Toque de Queda. Pero sólo se reportaron 142 capturados. La represión se elevó a cotas muy altas: tres matrimonios de profesores y un síndico de Tonacatepeque fueron sacados de sus casas durante el Toque de Queda y aparecieron asesinados; 138 trabajadores del ramo de Obras Públicas, 24 obreros de diversas industrias, y una secretaria del Juzgado de lo Laboral fueron asesinados; el centro de refugiados del arzobispado, "Domus Mariae", fue nuevamente cateado; 21 miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, reunidos en sesión de trabajo, fueron detenidos, según la Fuerza Armada por delación en los teléfonos que para eso ha instalado y anunciado, y luego catearon las casas de esos miembros, para buscar pruebas y armas, lo que provocó la protesta no sólo de sus familiares, sino que también de diversas instituciones; en fin, el coronel Majano fue detenido, parece que en Guatemala, y mantenido bajo arresto para ser sometido a juicio, de acuerdo a declaraciones de los más altos gobernantes. El Sindicato de Periodistas de El Salvador dirigió una carta a Duarte, con copia a la OEA y al ONU, pidiendo la libertad de los dos periodistas capturados en el cateo a la API-News y a El Independiente; y Mons. Rivera se unió a la petición por su libertad, alegando la necesidad de que haya voces discordantes en los medios de comunicación, que ya han quedado calladas.

En el ámbito socio-económico también hay algunos acontecimientos dignos de ser tomados en cuenta. Una noticia afirma que los trabajadores se quejan de que cada día que pasa se cierra alguna fuente de trabajo y se manifiestan contra todo tipo de terrorismo; de hecho, en febrero se cierra la fábrica de material electrónico "Data-ram International", con lo que se quedan 800 obreros sin trabajo, y ya sólo permanece abierta una fábrica en la Zona Franca "San Bartolo". Por su parte, el Ministerio de Economía toma dos medidas de alguna importancia: crea la Oficina del Comisionado Nacional para la Defensa del Consumidor, para que se presenten denuncias sobre la alteración de los precios, para lo que tendrá que identificarse el denunciante y el denunciado —lo que contrasta con las denuncias a los teléfonos de la Fuerza Armada, en las que no hace falta identificarse—; también se amplía el Acuerdo No. 76 y la lista de los productos que no se pueden importar de países extraños a los del Mercado Común Centroamericano. Ambas medidas nos sirven de indicadores del deterioro económico del país, aunque no se prevé que ayuden eficazmente a detenerlo.

El día 16 de febrero se entregan los 200 primeros títulos provisionales de propiedad de la tierra a los beneficiarios del Decreto 207, que se

propone traspasar a los trabajadores directos la tierra que tienen en arrendamiento, y contempla beneficiar a 450,000 familias campesinas. La aplicación del decreto estará confiada a la recién creada Financiera Nacional de Tierras Agrícolas (FINATA), a la que el beneficiario pagará el canon de arrendamiento de 1979, y si lo hace al contado se le aplicará un 33% de descuento sobre el valor total de la parcela. Curiosamente, la primera noticia sobre aplicación del decreto fue proporcionada por la Oficina de Información de la 5a. Brigada de Infantería de Sonsonate, en la que comunicaba la repartición de 576 manzanas de tierra de primera calidad en la hacienda "Las Marias", Sonsonate, a 250 familias de escasos recursos. El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) parece haber quedado al margen de todo esto, tal vez por falta de capacidad operativa y por estar absorbido en la aplicación de la otra fase de la reforma agraria.

El mes de febrero nos evidencia que el conflicto salvadoreño ha sido llevado al plano internacional, mientras que al interior del país las condiciones de vida se deterioran progresivamente, todo lo cual exige que se busque afanosamente una salida racional.

Eugenio C. Anaya, h.

